

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia  
JUZGADO : 27º Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-8008-2019  
CARATULADO : ONFRAY/CONSEJO DE DEFENSA DEL  
ESTADO/FISCO DE CHILE

Santiago, cinco de Enero de dos mil veintitrés

### VISTOS.-

En causa digital **Rol C-8008-2019**, por presentación de fecha 01 de marzo de 2019/folio 1, comparece don **ANDRÉS HERNÁN ONFRAY MONTENEGRO**, taxista, domiciliado en Lo Espejo N° 8203, comuna Lo Espejo, Provincia de Santiago, Región Metropolitana y deduce demanda en procedimiento de hacienda de indemnización de perjuicios en contra de doña **BEATRÍZ ELEONOR BELTRÁN FERNÁNDEZ**, funcionaria de Carabineros de Chile, domiciliada en Avenida Lo Espejo N° 0355, Departamento N° 354, comuna de La Cisterna, Provincia de Santiago, Región Metropolitana, en su calidad de conductora infractora culpable; y solidariamente en contra de la **DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA DE CARABINEROS DE CHILE**, institución representada por su Director General don **Mario Rozas Córdova**, funcionario de Carabineros de Chile, con domicilio en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1196, comuna de Santiago, Región Metropolitana, en calidad de propietario del vehículo placa patente FVWW.73-9, institución ésta sin personalidad jurídica propia y, por ello, representada judicialmente por el **FISCO DE CHILE** y éste a su vez representada por la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, doña **María Eugenia Manaud Tapia**, abogada, ambos con domicilio en calle Agustinas N° 1687, comuna y provincia de Santiago, Región Metropolitana, a objeto que, en atención a los fundamentos de hecho y consideraciones de derecho que esgrime, sea acogida la demanda en todas sus partes, y en definitiva, se le condene a los demandados solidariamente al pago de:



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BXTXXDHDEXC

- 1.- La suma de \$5.000.000 (cinco millones de pesos), relativos a la reparación del vehículo propiedad de la demandante.
- 2.- La suma de \$8.000.000 (ocho millones de pesos), por concepto de daño moral.
- 3.- La suma de \$11.293.000 (once millones doscientos noventa y tres mil pesos) por concepto de lucro cesante.
- 4.- Las costas procesales, y/o;
- 5.- La suma que el tribunal estime conveniente.

**En folio 6**, rola atestado receptorial donde consta que, con fecha 04 de junio de 2019, se notificó personalmente al demandado Fisco de Chile, a través de su representante doña María Eugenia Manaud Tapia, de la acción deducida en su contra.

**En folios 8 y 10**, se presenta doña Carolina Vásquez Rojas, Abogado Procurador Fiscal (S) de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, ambos con domicilio en calle Agustinas 1687, comuna y ciudad de Santiago, y en la representación invocada, contesta la demanda deducida por don Andrés Onfray Montenegro, solicitando su total rechazo, con costas.

**En folio 38**, rola atestado receptorial donde consta que, con fecha 20 de mayo de 2020, se notificó de conformidad a lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, a la demandada doña Beatriz Eleonor Beltrán Fernández, de la acción deducida en su contra.

**En folio 41**, consta resolución por la que se tuvo por contestada la demanda en rebeldía de la demandada doña Beatriz Beltrán Fernández.

**En folio 42**, el demandante evacuó el trámite de la réplica.



**En folio 44,** la demandada Beatriz Eleonor Beltrán Fernández evacua el trámite de dúplica.

**En folio 45,** la demandada Fisco de Chile evacua el trámite de dúplica.

**En folio 50,** se recibe la causa a prueba fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos sobre los que ha de recaer la misma rindiéndose por las partes la documental que obra en autos.

Encontrándose la causa en estado, por resolución contenida en **folio 74,** se citó a las partes a oír sentencia.

### **CONSIDERANDO.-**

**PRIMERO.-** Que, en estos autos ha comparecido don Andrés Hernán Onfray Montenegro e interpone demanda en procedimiento de hacienda de indemnización de perjuicios en contra de doña Beatriz Eleonor Beltrán Fernández, en su calidad de conductora infractora culpable del accidente que se narrará a continuación y solidariamente en contra de la Dirección de Logística de Carabineros, representada legalmente por su Director General don Mario Rozas Córdova, en calidad de propietaria del vehículo placa patente FVWV.73- 9 y representada judicialmente por el Fisco de Chile, y éste a su vez representada por la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, doña María Eugenia Manaud Tapia a objeto que, en definitiva, se le condene a los demandados solidariamente al pago de: **1.-** La suma de \$5.000.000 (cinco millones de pesos), relativos a la reparación del vehículo propiedad de la demandante; **2.-** La suma de \$8.000.000 (ocho millones de pesos), por concepto de daño moral; **3.-** La suma de \$11.293.000.- (once millones doscientos noventa y tres mil pesos) por concepto de lucro cesante; **4.-** Las costas procesales, y/o; **5.-** Lo que el Tribunal estime conveniente.

Funda su libelo expresando en cuanto a los **Hechos,** que consta en denuncia policial efectuada con fecha 18 de Julio de 2018, ante el funcionario de Carabineros de Chile don Aldo Alfonso Mulatero



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BXTXXDHDEXC

Fernández de la 33ª Comisaria de Ñuñoa, la declaración de Beatriz Eleonor Beltrán Fernández y don Andrés Hernán Onfray Montenegro, respecto del accidente de tránsito en el que éstos se vieron involucrados, refiriendo que, conforme a la declaración del Sr. Onfray Montenegro este señala que: “el día de hoy 13 de Julio de 2018, a las 09:50 horas aproximadamente, en circunstancias que conducía el taxi placa patente BJZT-30, marca Nissan, modelo V-16, colores reglamentarios, año 2010, por calle Villaseca en dirección sur, por la segunda pista de circulación, al llegar a la intersección con calle Hernán Cortés, comuna de Ñuñoa, se le atraviesa un automóvil placa patente FVWV-73, marca Hyundai, modelo Elantra, color gris, año 2013, conducido por la Sra. Beatriz Eleonor Beltrán Fernández, vehículo que no respetó la señal “Ceda el Paso” existente en calle Hernán Cortés, procediendo a frenar y no logrando detener por completo el móvil, colisionándolo en la parte trasera izquierda”.

Continúa indicando que, con todo, y de acuerdo al título “LESIONES” de dicha denuncia policial, el Sr. Onfray Montenegro fue trasladado al Hospital Salvador, siendo atendido por el médico de turno diagnosticándole CONTUSIÓN CAJA TORÁCICA Y CONTUSIÓN MUÑECA IZQUIERDA; ello, según certificado de lesiones N° 461353. Agrega que, en dicha denuncia policial bajo el título “DAÑOS”, se deja constancia que el vehículo placa patente BJZT-30, propiedad del Sr. Montenegro, resultó pérdida total del taxi. Por otro lado, dado el contenido de la denuncia, se deja constancia además, que la visibilidad aquel día era buena y conforme al estado de la calzada, el asfalto se encontraba en buen estado.

Resalta para determinar la causa basal del accidente descrito, que se ve reflejado en el título “SEÑALIZACIÓN”, en el cual, se deja constancia que existe una señal de Ceda el Paso por calle Hernán Cortés, esquina Villaseca, comuna de Ñuñoa, misma dirección y trayectoria que seguía el vehículo de la conductora Beatriz Eleonor Beltrán Fernández.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BXTXXDHDXC

Precisa que: a) Al lugar de los hechos concurrió personal del SIAT, equipo B, a cargo del Teniente Renato Sánchez Rubio y personal a su cargo en el Z-4845; b) El funcionario a cargo del procedimiento fue el Subteniente Gonzalo Nicolás Silva Gómez; c) En la denuncia policial consta la firma ilegible del comisario Mayor de Carabineros don Víctor Hugo Olavarría Sepúlveda y la del sub oficial de guardia de Carabineros don Aldos Alfonso Mulatero Fernández y; d) Ambos conductores quedaron citados a comparecer ante el Segundo Juzgado de Policía Local de Ñuñoa, a la audiencia del día Martes 07 de Agosto de 2018 a las 08:30 horas mediante boletas de citación N° 84306 y 84307.

Menciona que, con misma fecha 13 de Julio de 2018, se practicó la constatación de lesiones del Sr. Onfray Montenegro en el Hospital del Salvador, Unidad de Emergencia Adultos HDS. Por consiguiente, los datos de atención de urgencia de dicha institución, con categorización C-3 de Emergencia, arrojaron -de acuerdo a la atención del Médico Marco Antonio Salazar Campos- entre otras cosas lo siguiente y reproduce al efecto: “- Se describe la Anamnesis, en que el conductor del vehículo menor (taxi), sufre colisión, relatando el afectado, dolor en la mano izquierda y precordial. - Asimismo, se describe en el examen físico, dolor en la cara anterior del Tórax como también dolor y aumento del volumen de la mano izquierda. - Foco descriptivo: MC: Dolor torácico; AQ: Hernioplastía inguinal y dolor a la palpación de segunda y tercera articulación esternocostal derecha, producto del accidente automovilístico.

Prosigue señalando que, a mayor abundamiento, con fecha 07 de Agosto de 2018, se procedió -ante el Segundo Juzgado de Policía Local de Ñuñoa- a tomar declaración indagatoria de las partes involucradas en el accidente de tránsito. Dado lo anterior, inicialmente prestó declaración la Sra. Beatriz Eleonor Beltrán Fernández, quien bajo promesa de decir la verdad expuso: *“Ratifico lo expuesto en la denuncia. El día 13 de Julio de 2018, a las 09:50 horas más o menos,*



**conducía el automóvil Hyundai, año 2013, gris, placa patente FVW-73, propiedad de la Dirección de Logística de Carabineros.** Iba sola, por Hernán Cortes hacia el oriente, segunda pista, la primera estaba llena de vehículos estacionados, a unos 5 km por hora ya que al llegar a Villaseca pasé un reductor de velocidad, luego me detuve en la equina porque enfrenté signo Ceda el Paso, miré a la izquierda por si venía algún vehículo, como no vi nada comencé a cruzar y fui impactada en la parte trasera izquierda, con la parte frontal del taxi reglamentario, placa patente BJZT-30, que circulaba por Villaseca de norte a sur, segunda pista, porque en la primera también había vehículos estacionados, desconozco la velocidad porque solo sentí el impacto, no lo vi. Con el impacto giré hacia la derecha y quedé en la primera pista de Hernán Cortés pasada dicha intersección y mirando hacia el poniente. El taxi hizo como medio giro a la derecha y quedo mirando al oriente, justo en la intersección. Llamé a carabineros y se hizo presente el personal de la 33ª comisaría, tomaron el procedimiento. Ambos teníamos lesiones leves y fuimos atendidos en el Hospital de Carabineros y Servicio de Urgencia del Hospital del Salvador, respectivamente. Además, se me practicó alcoholemia. Visibilidad no muy buena, le daba el sol de frente y los vehículos que estaban estacionados en la primera pista no me dejaban visibilidad. Pavimento seco en buen estado. No tengo testigos”. Seguidamente, comparece don Andrés Hernán Onfray Montenegro, quien bajo promesa de decir la verdad expuso: “Ratifico lo expuesto en la denuncia. El día viernes 13 de Julio pasado, a las 09:50 horas, conducía el taxi reglamentario, año 2010, Nissan V-16, placa patente BJZT-30, de mi propiedad. Iba solo, por Villaseca hacia el sur, segunda pista porque en la primera hay vehículos estacionados, a unos 45 km por hora, en la intersección con Hernán Cortés teniendo derecho preferente de paso comencé a cruzar y de la nada apareció el otro vehículo, un automóvil Hyundai, gris, placa patente FVW-73 por Hernán Cortes al oriente, primera pista, a unos 35 km por hora y **su conductora no respetó el signo Ceda el paso.** Con el impacto mi



*vehículo se torció un poco hacia la izquierda, quedando en dirección nororiente, casi pegado al otro vehículo y este último quedó por Hernán Cortés en la primera pista en dirección oriente. Resulté con lesiones y fui llevado en ambulancia a la posta del Salvador, me tomaron radiografías y después me dijeron que la maquina estaba mala y debido a que el dolor que tenía en el pecho no cesaba me hicieron 3 electrocardiogramas pensando que podía ser el corazón, pero la maquina también estaba mala, a raíz de eso el fin de semana no pude dormir y mi hija me llevó a la Clínica Vespucio para descartar todo riesgo y un scanner de traumatología arrojó que tengo el esternón fracturado. No deseo ser atendido en el servicio médico legal. Visibilidad buena, pavimento seco en buen estado. Tengo testigos. Mi vehículo no cuenta con seguro, aun no tengo el monto de los daños y estamos en vías de avenimiento”.*

Señala que, con fecha 17 de agosto de 2018 la Sección Operaciones de Carabineros de Chile correspondiente a la Prefectura de investigación de accidentes de tránsito, solicitó prórroga del informe técnico 568-A-2018, señalando entre otras cosas que: “1. Dicho accidente de tránsito fue investigado por el Teniente Renato Sánchez Rubio que actualmente se encuentra en proceso de estudio y elaboración, mediante informe técnico N° 568-A-2018; 2. Debido a que cada una de las pericias deben ser desarrolladas en procesos internos de exigencia, respetando los criterios Técnicos que permitan generar un informe, se solicita a ese Tribunal tener a bien autorizar una prórroga de 30 días, tiempo suficiente para su análisis y confección...” En dicha solicitud consta la firma ilegible de don Alex Patricio Oporto Díaz, Mayor de Carabineros y Jefe de Operaciones de PREF. SIAT. con cargo de la institución. Sostiene que, lo señalado previamente es de suma importancia, toda vez que el informe acompañado posteriormente a los autos ROL 35381-2018-3, cumple con todos los requisitos de exigencia, cual fue emanado de Institución Carabineros



de Chile, acreditando todos los hechos fehacientemente mediante dicho informe.

Indica que, por otro lado, con fecha 26 de julio de 2018, se acompañó informe de alcoholemia N° 24835-18 emitido por el Servicio Médico Legal, practicado a don Andrés Hernán Onfray Montenegro, cual dio como resultado 0,00 g/l (gramos por litro de alcohol en la sangre). También fue acompañado con fecha 27 de julio de 2018, informe de alcoholemia N° 25109-18 emitido por el Servicio Médico Legal, practicado a la Sra. Beatriz Eleonor Beltrán Fernández, cual arrojó como resultado 0,00 g/l (gramos por litro de alcohol en la sangre), constando en ambos informes firma ilegible de la perito ejecutor de dicho informe, Soledad Benítez Vidal, con cargo del Servicio Médico Legal.

Señala que en fecha 12 de Septiembre de 2018, se acompañó informe N° 568-A-2018 relativo a la investigación por el accidente de tránsito sufrido por las partes. En dicho informe se señala, entre otras cosas, lo que sigue:

“- **DINÁMICA GENERAL DEL ACCIDENTE:** *“La participante (1), conducía el móvil por la segunda pista de circulación demarcada de Calle Hernán Cortes en dirección al Oriente Nor-Oriente. El participante (2) conducía el móvil por la segunda pista de circulación no demarcada de Calle Villaseca en dirección Sur Sur-Oriente. En las condiciones antes descritas, la participante (1) ingresó con el móvil al cruce no regulado de vías, sin respetar el derecho preferente de paso al móvil (2), circunstancia a la cual se encontraba obligada por enfrentar señal vertical y horizontal “CEDA EL PASO”, obstruyendo la normal circulación a este último, siendo colisionado el móvil (1) en el tercio medio lateral izquierdo de su estructura, con todos los tercios de la parte frontal de la carrocería del móvil (2), hecho ocurrido en la zona de impacto la cual se encuentra acotada y achurada en el levantamiento planimétrico adjunto, en los instantes en que ambos móviles se desplazaban en rodaje libre por la vía. Ocurrido lo anterior,*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BXTXXDHDEXC



*el móvil (1) producto del impacto por el móvil (2), realiza un giro en arco hacia la derecha desde la parte posterior de su estructura, describiendo un ángulo de 130° aproximadamente, trayectoria en la cual choca con las ruedas posteriores del sistema de tracción de su estructura, con la solera Sur Sur-Oriente de calle Hernán Cortés, hecho ocurrido en el lugar de impacto el cual se encuentra acotado y señalado en el levantamiento planimétrico adjunto, hasta detenerse, en una posición final la cual se encuentra acotada y señalada en el levantamiento planimétrico adjunto. Por su parte, el móvil (2) a consecuencia del impacto, realiza un giro en arco hacia la izquierda desde la parte anterior de su estructura, describiendo un ángulo de 110° aproximadamente, hasta detenerse, en una posición final la cual se encuentra acotada y señalada en el levantamiento planimétrico adjunto”.*

**- CAUSA BASAL DEL ACCIDENTE INVESTIGADO:** *“La participante (1), ingresa con el móvil al cruce no regulado de vías, sin respetar el derecho preferente de paso al móvil (2), circunstancia a la cual se encontraba obligada por enfrentar señal vertical y horizontal “CEDA EL PASO”, obstruyendo la normal circulación da este último, colisionando el móvil (2) al móvil (1), para posterior y por proyección el móvil (1) choca con la solera”.*

**- SE FUNDAMENTA LA DINAMICA GENERAL DE ACCIDENTE Y CAUSA BASAL, SOBRE LA BASE DE LOS SIGUIENTES DATOS:**

☐ “Nº 4) Las condiciones de visibilidad a la hora y en el lugar del accidente eran buenas, debido a la ausencia de partículas humedad o secas en suspensión, de forma tal que el participante (1) contaba con condiciones favorables para advertir la señal vertical y horizontal “Ceda el paso” existente en la calzada de calle Hernán Cortés.



□ N° 5) *Video grabación del accidente investigado, el cual se obtuvo desde calle Hernán Cortés N° 2.595, en el cual se observa el desplazamiento constante del móvil (1) por calle Hernán Cortés en dirección al Oriente Nor-Oriente y los instantes en que el móvil (2) circula por calle Villaseca en dirección al Sur Sur-Oriente.*

□ *Se hace presente que, conforme a lo señalado en la Ley de tránsito, “El conductor que enfrente la señal CEDA EL PASO deberá reducir la velocidad hasta la detención si fuere necesario, para permitir el paso a todo vehículo que circule por la otra vía y cuya proximidad constituya un riesgo de accidente”, situación que no ocurrió en el accidente investigado.*

□ N° 8) **Análisis de la declaración de la participante (1)**, la cual señala su desplazamiento por la segunda pista de circulación de calle Hernán Cortés en dirección al poniente y al llegar a calle Villaseca, baja la velocidad al enfrentar un lomo de toro y ve Ceda el Paso, baja la velocidad y al mirar que no venía ningún vehículo continuó con su marcha, siendo impactada por un automóvil. **Declaración que no concuerda con lo arribado en dinámica por este Oficial Investigador.”**

Profundiza en lo que respecta a la descripción de los daños del vehículo propiedad del demandante, y de acuerdo al detalle que arrojó el informe pericial señalado, sosteniendo que se encuentra:

□ Zona exterior – Parte Frontal: Con rotura de material, ralladuras, demostraciones de roce, desalojado de su base de fijación, desplazado hacia su izquierda en toda su estructura (daños por impacto al móvil (1); capó con hundimiento, abolladura, desprendimiento de pintura, demostraciones de roce, desplazado hacia su parte posterior en su tercio anterior (daños por impacto con móvil (1); parabrisas con rotura de material en su tercio inferior costado izquierdo (daño reflejo); mascara con rotura de material, desalojado de su base de fijación en toda su estructura (daños producto del impacto al móvil (1).



- Lateral Derecho: Tapabarro anterior, hundimiento abolladuras, desprendimiento de pintura en su tercio (daños producto del impacto con móvil (1).
- Lateral Izquierdo: Tapabarro anterior, abolladuras, hundimiento, desprendimiento de pintura, desplazado hacia la parte posterior en su tercio anterior. (daños producto del impacto con móvil (1).
- Grupo Motriz: Radiador desintegrado parte posterior, con rotura de material, deformación en toda su estructura. (daños producto del impacto con móvil (1).
- Sistema de alumbrado: óptico anterior derecho con rotura de material en toda su estructura (daños producto del impacto con móvil (1); óptico izquierdo desplazado de su base de fijación (daños producto del impacto con móvil (1).
- **PERITAJE TÉCNICO MECÁNICO CONFECCIONADO POR EL OFICIAL INVESTIGADOR TENIETE RENATO A. SANCHEZ RUBIO.**

Finalmente y respecto del informe en comento hace presente que en el acápite “PARTICIPANTES”, específicamente en la hoja N° 9 del informe confeccionado por el Teniente Renato Sánchez Rubio, se señala expresamente que “no fue posible consignar la declaración del Sr. Andrés Hernán Onfray Montenegro debido a sus lesiones”

Menciona que, con fecha 23 de octubre del año 2018 (habiéndose celebrado con anterioridad el comparendo de estilo), el Segundo Juzgado de Policía Local de Ñuñoa dicta sentencia, señalando en su parte resolutive que: “**TERCERO:** *Que, acorde al análisis de los hechos investigados y demás antecedentes allegados al proceso; las declaraciones prestadas por las partes; lo consignado en el informe Técnico N° 568-A-2018 a fojas 42, en relación a la causa basal del accidente; siendo todo ello apreciado y ponderado por este sentenciador de conformidad a los principios de la sana crítica, considerándolos elementos suficientes para formar convicción en orden a establecer que la causa basal de la colisión investigada, la*



constituye la conducta culpable y descuidada de la conductora del vehículo placa patente FVW-73, doña BEATRIZ ELEONOR BELTRÁN FERNÁNDEZ quien guiaba su vehículo sin estar atenta a las condiciones del tránsito del momento, toda vez que no respetó la señal Ceda el Paso que enfrentaba en calle Hernán Cortés en dirección al oriente, al llegar al cruce con calle Villaseca, colisionando con el vehículo placa patente BJZT-30 que conducía don ANDRÉS HERNÁN ONFRAY MONTENEGRO que circulaba por calle Villaseca, en dirección sur. Conducta que importa infracción a los artículos 108 y 140 inciso segundo del DFL número 1 del 2009 del Ministerio de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 18.290, presumiéndose su responsabilidad de acuerdo a lo establecido en los número 2 y 10 del artículo 167 del citado cuerpo legal. En consecuencia, ponderando lo anterior conforme a las reglas de la sana crítica o persuasión racional, conforme lo dispone el artículo 14 de la Ley número 18.287, este sentenciador ha arribado a la conclusión que **deberá dictarse sentencia condenatoria en contra de la conductora del vehículo placa patente FCCW-73, doña BEATRIZ ELEONOR BELTRAN FERNÁNDEZ** ya individualizada.

**Y TENIENDO PRESENTE:**

Estas consideraciones y atendido a lo dispuesto en los artículos 13 letra a) y 14 letra b), números 1 y 3 de la Ley número 15.231; artículos 140 inciso 2º, 167 números 2 y 10, 200 números 7 y 40, 204, 205 y 215 del DFL número 1 de 2009 del Ministerio de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.290; artículos 7 y siguientes de la Ley número 18.287;

**SE DECLARA:**

1. Que ha lugar la denuncia a fojas 1. En consecuencia **se condena a doña BEATRIZ ELEONOR BELTRAN FERNÁNDEZ**, ya individualizada, al pago de una multa de 1.5 UTM **por su responsabilidad como autora de conducción culpable y descuidada, por no respetar la señal Ceda el Paso que**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BXTXXDHDEXC

***enfrentaba, causando daños en un bien de propiedad de un tercero y lesiones leves, hecho acaecido el día 13 de julio de 2018.***

***2. Que, se absuelve a don ANDRÉS HERNÁN ONFRAY MONETENGRO, ya individualizado, de toda responsabilidad en estos autos.”***

Sostiene que, sin perjuicio de no haberse interpuesto la demanda civil en competencias y conocimiento de los autos por del Segundo Juzgado de Policía Local de Ñuñoa, la demandada nunca tuvo la intención de pagar al actor y una vez condenada como infractora conforme a la sentencia señalada, tampoco manifestó intención de resarcir voluntariamente los perjuicios ocasionados al señor Onfray Montenegro.

Finaliza repasando que el vehículo en el que se desplazaba la demandada de autos es de propiedad de la Dirección General de Carabineros, institución que tampoco tomó parte en el asunto a fin de solucionar el conflicto como tampoco se manifestó para resarcir los daños y perjuicios causados.

Se refiere luego al Derecho invocado el artículo 2314 del Código Civil que señala: *“El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”*, agregando que, en la especie, se ha acreditado por sentencia firme y ejecutoriada del Segundo Juzgado de Policía Local de Ñuñoa, la responsabilidad de la Sra. Beatriz Eleonor, al señalar la sentencia que se condenó a la demandada *por su responsabilidad como autora de conducción culpable y descuidada, por no respetar la señal Ceda el Paso que enfrentaba, causando daños en un bien de propiedad de un tercero y lesiones leves, hecho acaecido el día 13 de julio de 2018”*. A mayor abundamiento, cita al efecto el artículo 2315 del mismo cuerpo legal que señala que *“Puede pedir esta indemnización no sólo el que es dueño o poseedor de la cosa que ha sufrido el daño...”*, añadiendo que en virtud a dichas prescripciones legales se pone de manifiesto la



clara titularidad en el ejercicio de la presente acción por parte del Sr. Onfray Montenegro, toda vez que él ha sido el afectado directo, y el bien mueble objeto de destrucción y/o daño es de su exclusiva propiedad.

Cita por otro lado el artículo 2316 del Código Civil que transcribe sosteniendo que la demandada es a todas luces, responsable de indemnizar los perjuicios ocasionados al demandante, sin embargo, la demandada como persona natural, Sra. Beatriz Eleonor, no es la única responsable de los daños y perjuicios ocasionados, haciendo presente que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2317, “Si un delito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o cuasidelito...”, siendo en la especie y tal como se acreditará en la etapa procesal correspondiente, el vehículo en el que se desplazaba la demandada, es de propiedad de la Dirección General de Carabineros de Chile, por lo cual, esta última a través del Consejo de defensa del Estado, es solidariamente responsable de los daños o perjuicios ocasionados respecto del bien mueble propiedad del actor, así como de los daños y perjuicios ocasionados en la persona natural del Sr. Onfray Montenegro y su peculio profesional.

Adiciona lo previsto en el artículo 2329 del mismo cuerpo legal que reproduce y agrega que, la misma sentencia del Segundo Juzgado de policía local de Ñuñoa condena claramente a la Sra. Beatriz Eleonor, por su responsabilidad como autora de conducción culpable y descuidada, por no respetar la señal Ceda el Paso que enfrentaba, causando daños en un bien de propiedad de un tercero y lesiones leves, dejándose de manifiesto su claro actuar negligente objeto de reparación.

Prosigue remitiéndose a doctrina (Rueda Prada, Diana, La indemnización de los perjuicios extra patrimoniales en la jurisdicción de lo contencioso administrativo en Colombia, Tesis de Maestría (con énfasis en Derecho Público), Universidad del Rosario, Facultad de Jurisprudencia, Bogotá, 2014, p. 23.) y a jurisprudencia de la Corte



Suprema de Colombia, respecto de lo que se entiende por daños y perjuicios y redonda citando los artículos 7, 28 inciso 2, 38 y 101, todos, de la Constitución Política de la República e invoca sobre la materia doctrina del destacado profesor don Eduardo Soto Kloss (Derecho Administrativo, Temas fundamentales, Eduardo Soto Kloss, Editorial Legal Publishing, p. 738).

Continúa invocando el artículo 4 de la Ley 18.575 sobre las Bases Generales para la Administración del Estado, que establece que: “El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado y suma a ello lo previsto en el artículo 18 del cuerpo legal señalado, que establece que: “El personal de la Administración del Estado estará sujeto a responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pueda afectarle”.

Invoca doctrina sobre la materia del autor Oscar González Molina, en su publicación denominada Responsabilidad del Estado y concluye que, para los autores antes referidos la responsabilidad del Estado es objetiva; porque no concurre el dolo ni la culpa para hacerla efectiva, directa, porque los artículos 38, inciso 2° de la CPR, 4 Y 42 de la LOCBGAE hacen inmediatamente responsable a la Administración del estado, sus organismos y municipalidades de las lesiones o daños que sufran los administrados, y regida por el Derecho Público.

Se extiende refiriéndose a conceptos relativos al: **Daño Emergente**, invocando doctrina al efecto y destacando que se ha producido una pérdida real, efectiva y manifiesta en el patrimonio del demandante, toda vez que se ha dejado de manifiesto en los autos competencia del Segundo Juzgado de Policía Local de Ñuñoa, el actuar negligente de la demandada que ocasiono daños en un bien mueble, daños en la persona natural del demandante y perjuicio en su peculio profesional; **Daño Moral**, indicando que el daño moral que se



solicita se fundamenta en la existencia de la angustia (naturalmente generada por la incertidumbre de obtener una respuesta satisfactoria por parte de la infractora o de su institución, en cuanto a solucionar el perjuicio ocasionado), frustración (toda vez que en los autos competencia del Segundo Juzgado de Policía Local de Ñuñoa, la demandada señaló estar en vías de avenimiento con el afectado, cuestión que a todas luces fue una quimera para el señor Onfray Montenegro), pena, congoja, ira, impotencia (ya que continúa el pasar de los meses desde que ocurrieron los hechos sin obtener respuesta positiva y haberle resarcido los daños y perjuicios ocasionados, teniendo que invertir tiempo y dinero propio en intentar solucionar el conflicto vía judicial) y el dolor espiritual que le produjo al demandante el hecho culpable del cual fue víctima; **Lucro cesante**, hace presente que éste criterio de indemnización se produjo – efectivamente – dada la negligencia en el actuar de la demandada, lo que provocó una reducción o disminución en el peculio profesional del demandante, recordando que el Sr. Onfray Montenegro es chofer de Taxi reglamentario, que contaba con todos sus documentos al día al momento de la colisión y en virtud de ello y tomando en cuenta lo que producía o produce diariamente en el desempeño de su labor, el demandante dejó de percibir solo entre el día 18 de diciembre de 2018 y 01 de enero de 2019, la suma de \$1.129.300 (Un millón ciento veintinueve mil trescientos pesos), es decir tan solo 15 días de trabajo y si se hace el cálculo mensual, es decir, multiplicando por dos la suma señalada, da un total de \$2.258.600 (dos millones doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos pesos), debiéndose multiplicar dicha suma por el tiempo en que él dejó de percibir sus rentas, es decir, cinco meses de paralización de su vehículo, es decir, desde el día 13 de Julio de 2018 al 13 de diciembre del mismo año, tiempo en el cual tuvo que reparar por sus propios medios económicos, el vehículo fuente de su trabajo, indicando que entre las fechas señaladas, median 5 meses, por lo cual el actor dejó de percibir, sólo por concepto de renta, la suma de \$11.293.000 (Once millones doscientos





noventa y tres mil pesos), circunstancia que perfectamente puede acreditar con las boletas que emite su medio de transporte por cada desplazamiento de pasajero.

**SEGUNDO.-** Que, **contestando la demanda** el demandado **Fisco de Chile**, solicita su total rechazo, con costas. Preliminarmente aclare que la Dirección de Logística de Carabineros, no es una persona jurídica distinta y autónoma de Carabineros de Chile y está subsumida en el organigrama institucional a cargo de un General en servicio activo de dicha Institución. Añade Carabineros de Chile a su vez está amparado por la persona jurídica de derecho público Fisco de Chile, por tanto en autos hay un solo demandado que debe comparecer y es el Fisco de Chile.

En su acápite denominado **“I.- La Demanda”**, repasa que el señor Andres Hernan Onfray Montenegro, interpone demanda civil de indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, por los daños que les habrían sido causados al vehículo de su propiedad, taxi placa patente BJZT-30, marca Nissan modelo V-16, a consecuencia del accidente de tránsito ocurrido con fecha viernes 13 de julio de 2018, siendo las 9:50 horas aproximadamente, y en circunstancias que conducía dicho vehículo por calle Villaseca en dirección Sur, por la segunda pista de circulación, al llegar a la intersección con calle Hernán Cortes, comuna de Ñuñoa, se le atravesó el automóvil placa patente FVWV-73, marca Hyundai, modelo Elantra , color gris, año 2013, conducido por la funcionaria de Carabineros, Beatriz Eleonor Beltrán Morandé, vehículo que no respecto la señal ceda al paso existente en calle Hernán Cortes, procediéndolo a frenar y no logrando detener por completo el móvil, colisionándolo por la parte de atrás. Señala que producto del accidente provocado por el furgón policial, resultó con lesiones, de las que fue tratado en el Hospital Salvador, y que en la denuncia presentada deja constancia que el taxi de su propiedad resultó con pérdida total. Indica asimismo, que con fecha 23 de octubre de 2018 el Segundo Juzgado de Policía Local de Ñuñoa, dictó sentencia por la que se declara que



ha lugar a la denuncia a fs. 1 y en consecuencia se condena a doña Beatriz Eleonor Beltrán Fernández, ya individualizada, al pago de una multa de 1,5 UTM por su responsabilidad como autora de conducción culpable y descuidada por no respetar la señal Ceda el Paso que enfrentaba, causando daños en un bien de propiedad de un tercero y lesiones leves, hechos acaecidos el 13 de julio de 2018 y que se absuelve a don Andrés Hernán Onfray Montenegro, ya individualizado, de toda responsabilidad en estos autos.

Añade que en el libelo se indica que, a consecuencias de los referidos hechos sufrió los siguientes daños: daño emergente consistente en la pérdida total del referido vehículo de su propiedad, sin especificar nada más al respecto; daño moral por la angustia, frustración e ira que le fueron causados por la tardanza en ser indemnizado y un lucro cesante, ya que dejó de percibir a causa del accidente , y debido a la inactividad del taxi, la suma de \$11.293.000 desde el 13 de julio de 2018 al 13 de diciembre del mismo año.

Menciona que la actora funda la demanda en los artículos 2314, 2315, 2316, 2317 y 2329 del Código Civil, siguientes del Código Civil, normas que regulan la responsabilidad subjetiva por culpa, pero en contradicción con lo anterior señala que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 38 inciso 2° de la Constitución, en relación a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del mismo cuerpo legal, y lo dispuesto en los artículos 4 y 42 de la Ley Orgánica de Bases de la Administración del Estado, la responsabilidad del Fisco-Dirección de Logística de Carabineros de Chile sería objetiva, porque no es necesario que concurra ni el dolo ni la culpa para hacerla efectiva en forma directa. Además, señala que el Fisco de Chile sería responsable solidario con la codemandada Sra. Eleonor Beltrán Fernández de la indemnización de los perjuicios producidos por el delito o cuasidelito con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2317 del Código Civil que dispone que *“si un delito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o cuasidelito”* y termina solicitando que se condene



solidariamente a los demandados Fisco de Chile y Beatriz Eleonor Beltrán Morandé al pago de los siguientes conceptos: 1. \$5.000.000(cinco millones de pesos) relativos a la reparación del vehículo propiedad del demandante. 2. \$8.000.000 (ocho millones de pesos) por concepto de daño moral. 3. \$11.293.000 (once millones doscientos noventa y tres mil pesos) por concepto de lucro cesante. 4. Costas procesales 5. y/o lo que SS estime conveniente.

Bajo el apartado que denomina **“II.- Controversia De Los Hechos De La Demanda”**, controvierte formal y expresamente todos y cada uno de los hechos en que se fundamenta la demanda, incluyendo los supuestos daños y perjuicios alegados, los que el demandante deberá acreditar en su oportunidad y por los medios de prueba legal, haciendo presente que desconoce toda responsabilidad en los hechos de la demanda y sólo aceptará aquellos que, en definitiva, resulten legalmente acreditados en estos autos y así el demandante deberá probar las supuestas actuaciones o hechos que habrían dado origen a la responsabilidad del Fisco de Chile, así como la efectividad, naturaleza y entidad de los presuntos perjuicios que tales actuaciones o hechos le habrían causado; y la existencia de una relación causal directa entre aquellos y éstos. De igual modo, controvierte que, a causa del accidente, y debido a la inactividad del taxi, que haya dejado de percibir la suma de \$11.293.000 desde el 13 de julio de 2018 al 13 de diciembre del mismo año, como también que haya estado inactivo dicho vehículo taxi durante dicho periodo, y que haya sufrido una pérdida total.

Señala que, atendido lo expresado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, le corresponde a la parte actora en el juicio la carga de la prueba respecto de la totalidad de los hechos que invoca en la demanda, así como respecto de la existencia de la obligación que el actor sostiene que tendría el Fisco en la indemnización de los daños causados.

A continuación y en el apartado que titula **“III.- Inexistencia De Supuesta Responsabilidad Extracontractual De La Dirección De**



**Logística De Carabineros De Chile Que Se Invoca En La Demanda**", en primer término, opone como excepción, alegación o defensa, **la absoluta ausencia o inexistencia de responsabilidad extracontractual alguna del Fisco -Dirección de Logística de Carabineros, en los hechos que sirven de fundamento a la demanda**, indicando que debe tenerse en cuenta que, conforme lo establece el artículo 101, inciso 2º de la Constitución Política del Estado, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas por Carabineros e Investigaciones, las que constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas y dependen del Ministerio de Seguridad Pública. Además, de la referida norma de la Constitución Política de la República, son aplicables a su personal, la ley Nº 18.961, "Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile", publicada en el DO de 7/03/1990, y el DFL (G) Nº 2, de 1992, que "Establece Estatuto del Personal de Carabineros de Chile", así como diversos cuerpos Reglamentarios que regulan aspectos particulares de su vida funcionaria.

Invoca los artículos 1, 2, 3, 17 y 20 de Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, los que reproduce al efecto y añade que, de la lectura de la demanda se comprueba que el actor fundamenta la supuesta responsabilidad del Estado, en una pretendida responsabilidad objetiva que tendría la Dirección de Logística de Carabineros, como, asimismo, en el derecho común, específicamente, en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil y artículo 2329 del Código Civil, los que cita expresamente, aclarando que la normativa aplicable al presente caso, sobre el particular la responsabilidad extracontractual de las "Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad" no se rige en caso alguno, como parece creer el demandante, por algún régimen especial de responsabilidad objetiva del Estado, ni tampoco por el régimen general de responsabilidad



extracontractual del Estado, sino, como veremos, exclusivamente por el derecho común.

### **1°. -Inexistencia de la pretendida responsabilidad objetiva del Fisco Carabineros de Chile.**

En primer lugar, alega la inexistencia de un supuesto régimen especial de responsabilidad objetiva del Estado, en los términos expuestos por el actor, indicando que dicha supuesta responsabilidad objetiva del Estado debe descartarse de plano en el ordenamiento jurídico, conforme expone:

**A.-** Los principios básicos de la responsabilidad estatal se encuentran contenidos en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República, de 1980 y esas normas entregan su regulación y aplicación, en sus incisos terceros, al legislador, expresando claramente que la responsabilidad que se origina y sanciona es “la que la ley señala”. Por otra parte, de la lectura de dichos preceptos fluye con claridad que tal responsabilidad surge sólo cuando los órganos no someten su acción a la Constitución y a las leyes o actúan fuera de su competencia, atribuyéndose autoridad o derechos que no le han sido conferidos por el ordenamiento jurídico o contraviniendo las leyes.

**B.-** Por su parte, el artículo 38, inciso 2º, del texto constitucional, alude al derecho de los ciudadanos a reclamar por las lesiones sufridas por actos de la Administración, pero sin establecer por sí mismo ningún régimen de responsabilidad específica del Estado, objetiva o subjetiva, por lo que tal artículo tiene sólo un alcance de atribución de competencia a los tribunales ordinarios de justicia, quedando claro de acuerdo a ello, que la norma contiene sólo una regla de jurisdicción y competencia para los asuntos contencioso-administrativos. Por una parte, define el ámbito específico u objeto propio de estos asuntos - versar sobre reclamaciones de las personas que sean lesionadas en sus derechos por la administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades - y, por la otra, establece que tales reclamaciones quedan comprendidas en esa jurisdicción, correspondiendo a la ley determinar el tribunal competente para



conocer de ellas. Indica que, según lo expuesto, resulta absolutamente indiscutible que el artículo 38º inciso 2º de la Constitución Política de 1980, no es una norma substantiva destinada a regular la responsabilidad del Estado, sino que, a entregar la competencia para conocer los asuntos contenciosos administrativos, a los tribunales que señale la ley.

Refiere que, no es posible entonces pretender que esta norma ha eliminado el elemento subjetivo inherente a la obligación de indemnizar, para reemplazarlo por la mera relación de causalidad material entre el daño y la actividad de la administración, como parece creer el actor, resultando tal planteamiento absolutamente arbitrario e infundado, ya que nada dice sobre la naturaleza objetiva o subjetiva de la responsabilidad. Comenta que, el sistema de responsabilidad civil extracontractual del Estado en Chile, se encuentra establecido de manera general en el artículo 42 de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, que incorpora los conceptos de falta de servicio y falta personal, debiendo tenerse presente que la “falta de servicio” no es responsabilidad objetiva, sino que para que opere se requiere la “culpa del servicio”, es decir, debe darse el mal funcionamiento del servicio, su funcionamiento tardío o el no funcionamiento absoluto del mismo a título de dolo o culpa del mismo servicio, lo que descarta la idea de que pueda operar sólo en virtud de la relación de causalidad entre el hecho y el daño, siendo indiferente la existencia o inexistencia de culpa o dolo. Añade que, lo anterior, no tiene ninguna contradicción con lo dispuesto por el artículo 4º de la citada ley N° 18.575, ubicado en el título primero sobre normas generales, que sólo tuvo por objeto establecer, de un modo general, el principio de la existencia de la responsabilidad del Estado, sin pretender objetivar la responsabilidad estatal.

Concluye que, no existe un régimen de responsabilidad extracontractual del Estado de carácter objetiva, como pretende la demandante, ni por hechos propios, ni menos por delitos o cuasidelitos



cometidos por terceros, por cuanto no existen normas de rango constitucional o legal que la establezcan.

## **2º.- Régimen De Responsabilidad Extracontractual De Carabineros De Chile Se Rige Por El Derecho Común.**

Refiere que, por expresa disposición del artículo 21 ( antes 18 ), de la misma Ley N° 18.575, de 1986, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, las Fuerzas Armadas - y las de Orden y Seguridad Pública - están, sin embargo, excluidas de la aplicación de la norma del artículo 42 ( antes 44 ), contenida en el Título II sobre "Normas Especiales", y, por consiguiente, no se les aplica el régimen general de responsabilidad extracontractual del Estado, fundada en la responsabilidad subjetiva de la "falta de servicio". Cita al efecto el inciso 2º del referido artículo 21 (antes 18) de la Ley N° 18.575, que transcribe y conforme a esa norma expresa, Carabineros de Chile está excluido absolutamente y en su integridad de la aplicación de todo el Título II de la referida ley, dentro del cual se contempla, el régimen general de responsabilidad del Estado, fundada en la "falta de servicio".

Menciona que, por su parte, ni la Constitución Política de la República ni la Ley N° 18.948, de 1990, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, contienen normas que regulen especialmente esa materia.

Añade que, en consecuencia, ante la exclusión expresa del régimen general de responsabilidad extracontractual del Estado, por una parte, y la total ausencia de otras normas constitucionales o legales de carácter especial que regulen dicha responsabilidad, por otra, corresponde en el presente caso recurrir al derecho común, el cual, en el Título XXXV, denominado "De los delitos y cuasidelitos", artículos 2.314 y siguientes, del Código Civil, contiene las normas que regulan, en general, la responsabilidad extracontractual. Lo anterior es expresamente reconocido en la demanda, la cual cita como fundamentos de derecho de la acción, justamente, los artículos 2314 y siguientes del Código Civil artículo y 2.329 del Código Civil, contenidos



en el referido Título XXXV. De acuerdo a esas normas generales del derecho común, la responsabilidad extracontractual sólo surge para una persona cuando ejecuta una acción u omisión ilícita, a título de dolo o culpa, y ella produce un daño o perjuicio patrimonial o moral, y siempre que exista una relación de causalidad directa entre aquella acción u omisión y el daño o perjuicio, siendo el dolo la intención positiva de inferir injuria o daño a la persona o propiedad de otro, y la culpa, la negligencia, desidia o falta de cuidado debido en el obrar, por parte del autor del daño.

Indica que, por otra parte, y dado que el hecho supuestamente dañoso lo habría cometido un funcionario dependiente del Estado, resulta aplicable al caso lo dispuesto por los artículos 2.320 y 2.322 del Código Civil, conforme a los cuales toda persona debe responder no sólo de sus propias conductas, sino que, además, de las conductas de quienes estuviesen a su cuidado, como es el caso de los dependientes, cuando éstos actúan en el ejercicio de sus funciones, a menos que el hecho haya sido ejecutado por el dependiente de un modo impropio que el empleador, aun habiendo cumplido con su deber de vigilancia, no tenía medio de prever o impedir, coligiéndose de ello que, para que surja la obligación del empleador, en este caso el Estado, de indemnizar perjuicios por una actuación proveniente de sus dependientes, es indispensable que concurren todos y cada uno de los requisitos de procedencia de la responsabilidad civil extracontractual por el hecho ajeno, antes mencionados, y que establecen los artículos 2.314, 2.320 y 2.322 el Código Civil y conforme a esta última normativa, es del caso que no se cumplen todas las condiciones y requisitos de procedencia de la responsabilidad del empleador por el hecho de sus dependientes, como se demostrará a continuación.

Luego, en el apartado que denomina **“IV.- Improcedencia de la responsabilidad del Fisco de Chile en aplicación de lo dispuesto en los artículos 2320 y 2322 del Código Civil”**, hace mención a que, la Dirección de Logística de Carabineros no es responsable por el





hecho cometido por la funcionaria fiscal Beatriz Eleonor Beltrán Fernández a que alude la demanda ya que no ha podido prever o impedir el accidente causado por dicha conductora, vulnerando las normas del tránsito. Así el último inciso del artículo 2320 del Código Civil dispone que cesara la responsabilidad de las personas que estuvieren a su cuidado “sin con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho” , lo que dicho en otras palabras, el daño se debió a un acto “impropio” de la conductora fiscal y codemandada de autos Sra. Beatriz Eleonor Beltrán Fernández y autora material del mismo, que consistió en saltarse el “Ceda al Paso sin respetar el derecho preferente de paso que tenía el vehículo conducido por el señor Onfray Montenegro, demandante de autos, hecho que Carabineros de Chile no pudo prever ni impedir.

Asegura que Carabineros de Chile se preocupó que la codemandada, tuviera la adecuada preparación para conducir vehículos, no existiendo antecedentes que pudiesen podido alentar a la Institución que la Sra. Beltrán Fernández pudiese haber conducido de manera inadecuada o con infracción de normas de tránsito. En otras palabras Carabineros de Chile empleó respecto de dicha conductora el cuidado ordinario y la autoridad competente a fin de evitar hechos como el señalado en la demanda, el cual pudo ocurrir entonces sólo debido a una actuación “impropia” del referido conductor fiscal, es decir, ocurrió exclusivamente por responsabilidad de dicho conductor y resultando imposible para el empleador Fisco de Chile “prever” y menos “impedir” el incumplimiento de las normas del tránsito , en el momento y lugar en que ocurrieron los hechos.

Sostiene que, de acuerdo con todo lo dicho en este acápite, y por no cumplirse tampoco en el presente caso todas las exigencias y requisitos que el derecho común establece para que surja la responsabilidad del Estado de indemnizar por el hecho ajeno, en su calidad de empleador, la demanda debe ser también rechazada por este capítulo.



Enseguida, en el acápite que titula **“V.- Improcedencia de la responsabilidad solidaria del Fisco-Dirección de Logística de Carabineros de Chile invocada en la demanda”** , expone que el fundamento de la demanda para invocar la responsabilidad solidaria del Fisco de Chile en la indemnización de los perjuicios causados se funda en lo dispuesto en el artículo 2317 del Código de procedimiento Civil que dispone: *“si el delito o cuasidelito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o cuasidelito ...”*, sin embargo, el Fisco -Carabineros de Chile no ha incurrido en ningún delito cuasidelito, toda vez que la única persona que ha sido condenada por el 2° Juzgado de Policía Local por los hechos que se señalan en la demanda, es la conductora Sra. Beltrán Fernández y en consecuencia, la responsabilidad civil de los mismos hechos sólo debe recaer sobre su autor material, debiendo rechazarse la responsabilidad solidaria del Fisco-Dirección de Logística de carabineros.

Sigue refiriéndose en el capítulo que nombra como **“VI. Improcedencia de la indemnización por reparación del vehículo solicitada”**, sosteniendo que el demandante pretende en la parte petitoria de la demanda, una indemnización por la suma de \$5.000.000 en concepto de los gastos de reparación del vehículo BJZT-30 de propiedad del demandante, por los supuestos daños que se le habría causado en el accidente de marras, lo que controvierte y niega, tratándose de una suma que no tiene relación con la realidad, y que supone un enriquecimiento injusto para el demandante, sin embargo, dicha parte petitoria del libelo no tiene ninguna relación con lo que se solicita o se explica en el cuerpo de la demanda: en efecto, la demanda se funda en la pérdida total del vehículo a consecuencias del accidente, como se desprende del acápite señalado como daño emergente del libelo, lo que constituye una contradicción con la indemnización que solicita al tribunal por la cantidad de \$5.000.000 como compensación por la reparación del vehículo, ya que en este



caso cabe deducir que no existió tal pérdida total del vehículo (tampoco señala el demandante una evaluación de tal pérdida), razón por la cual la demanda por la que se solicita que se condene al Fisco de Chile al pago de una presunta reparación del vehículo debe ser rechazada. En efecto, se señala en la demanda que habría efectuado denuncia policial bajo el título de daños, en la que se deja constancia que el vehículo placa patente BJZT-30 de propiedad del señor Montenegro sufrió pérdida total y en congruencia con lo anterior, en el capítulo del libelo que se refiere al daño emergente funda esta indemnización en la pérdida real, efectiva y manifiesta en el patrimonio del demandante, diferenciando este concepto de los daños y perjuicios, ya que estos obedecen en cambio a la “compensación que se exige a quien ha causado un daño para reparar éste.” CDE □ 14 Atendido lo expuesto debe rechazarse la demanda a este respecto, dado que dicha petición resulta ininteligible y por lo tanto inepta.

Se refiere luego a la **“VII.- Improcedencia del lucro cesante cuya indemnización se demanda”**, indicando que de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 1556 del Código Civil, la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento. Agrega el inciso 2° de la misma norma que se exceptúan los casos en que la ley la limita expresamente al daño emergente y según aparece del tenor literal del precepto, por regla general ambos tipos de perjuicios son indemnizables y, sea que se trate de daño emergente o lucro cesante y conforme es opinión unánime en la doctrina, para que el daño dé lugar a reparación debe, en primer término, ser cierto. La exigencia que el daño, para resultar reparable por la vía de la indemnización, sea cierto quiere significar que debe ser real o efectivo, esto es, tener existencia. La afirmación importa rechazar la indemnización del daño eventual o meramente hipotético, es decir, de aquel que no se sabe si va a ocurrir o no. Así, los daños apoyados en hipótesis o conjeturas, por fundadas que



parezcan, sea presente o futuro, no da derecho a indemnización, ya que el daño debe ser cierto, es decir real y efectivo. Así se desprende de los artículos 1437, 2314, 2315 y siguientes del Código Civil. Adiciona que, afirma el demandante que desarrollaba la actividad económica de chofer de taxi reglamentario, y por estar paralizado desde el día 13 de julio de 2018 al 13 de diciembre del mismo año dejó de percibir en dicho periodo la suma de \$11.293.000, razón del calculo que hace de lo que producía cada día el vehículo, esto es, su actividad provenía de una actividad que le producía ingresos variables e inestables de múltiples viajes, que dependía de las ventas que pudiese realizar por viajes, por lo que nada garantizaba que pudiese haber mantenido el mismo tipo de ingresos por su actividad, toda vez que el demandante especula con los ingresos provenientes de negocios que podría haber desarrollado, ni que los mismos estuviesen asegurados, razones por la que señala debe rechazarse la demanda, ya que la suma que se solicita en concepto de indemnización de perjuicios por lucro cesante representa meras especulaciones del demandante con el objeto de obtener una mayor indemnización, por lo que debe rechazarse.

Bajo el título que denomina **“VIII.- Improcedencia de la indemnización daño extrapatrimonial demandado”**, indica que, el demandante funda su demanda de indemnización del daño extrapatrimonial en las simples molestias y disgustos por los que ha pasado por la tardanza en ser indemnizado a consecuencia de los hechos que describe en la demanda, sin embargo, dichas circunstancias, no constituyen un daño moral indemnizable, razón por la cual debe rechazarse la demanda a este respecto, argumentando al efecto que el demandante señala que los hechos de los que fue víctima le habrían producido una angustia por la incertidumbre de obtener una respuesta satisfactoria por parte de la conductora Sra. Beatriz Eleonora Beltrán Fernández; frustración toda vez que en los autos de competencia del Juzgado de Policía Local de Ñuñoa, la demandada señalo estar en vías de avenimiento con su representante,



cuestión que a todas luces señala que para él fue una quimera y una ira e impotencia, ya que continua el pasar de los meses desde que ocurrieron los hechos sin obtener respuesta positiva ni que se le hayan resarcido los daños y perjuicios ocasionados, teniendo que invertir tiempo y dinero en intentar solucionar el conflicto vía judicial, todo lo cual resulta improcedente y debe rechazarse como fundamento de un daño moral indemnizable, ya que dichas circunstancias no condicen una lesión de un atributo de la personalidad, añadiendo que, al respecto se ha de señalar que existe consenso en la doctrina en el sentido que, para que exista daño moral indemnizable, no basta con que el hecho ilícito cause una molestia, dificultad, inconvenientes o dolor, aun cuando sea profundo, sino que es necesario que esa repercusión interna se exteriorice en un menoscabo probado en los atributos o facultades psíquicas o morales de la persona. En efecto, el daño moral no está conformado por simples contrariedades o molestias que se originan en la vida de todo ser humano. Esas propias de la vida en sociedad que no está conformado sólo por agrados y placeres. El disgusto forma parte de la vida de relación, pero el daño moral implica la alteración de un atributo de la personalidad, el atentado a un sentimiento de afección, un atentado a la persona física misma, para quienes no ven en el daño corporal un daño autónomo. Se refiere a doctrina en ese sentido. (José Pablo Vergara : La mercantilización del daño moral”, Revista de Derecho del Consejo de Defensa del Estado, N° 1, julio 2000.”, concluyendo que existe consenso en la Doctrina en el sentido que, para que exista daño moral indemnizable, no basta con que el hecho ilícito cause una molestia, dificultad, inconvenientes o dolor, aun cuando sea profundo, sino que es necesario que esa repercusión interna se exteriorice en un menoscabo probado en los atributos o facultades psíquicas o morales de la persona. Cita jurisprudencia concordante con lo anterior, de la Excma. Corte Suprema, en sentencia de fecha 20 de mayo de 2003, dictada en los autos Rol 1557-03 y complementa señalando que es en la perspectiva antes indicada de acuerdo con la cual hay que regular el



monto de la indemnización, y asumiendo el supuesto indiscutido de que nunca puede ser una fuente de lucro o ganancia, sino que debe ser un procedimiento destinado para atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida y así, como ha señalado la doctrina, el juez al avaluar este daño debe proceder con prudencia, tanto para evitar los abusos a que esta reparación puede dar origen, cuanto para impedir que se transforme en pena o en un enriquecimiento sin causa para quien lo demanda. Advierte por otra parte que tampoco resulta procedente acudir a la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades. Sólo en casos excepcionales, indicados en la ley, no se sigue este principio, como por ejemplo con la reducción que contempla el artículo 2330 del Código Civil en caso de que la víctima se haya expuesto imprudentemente al daño, por lo que, no habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica del tercero civilmente responsable en un hecho delictual o cuasi delictual, habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, ni más ni menos, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado al pago, aseverando que en tal sentido, las cifras pretendidas en la demanda como compensación del daño moral resultan excesivas en relación con los montos de indemnización que suelen fijar los Tribunales para compensar daños extrapatrimoniales, teniendo en cuenta, además, la realidad económica de nuestro país y en ese contexto, lo que la demandante estima en términos muy escuetos como daño moral, no se aviene con las exigencias indicadas.

Termina indicando que, en consecuencia de lo antes expuesto, deben rechazarse las pretensiones del demandante en concepto del daño extrapatrimonial demandado ya que ya que el actor no ha sufrido una lesión en los atributos de su personalidad a consecuencia de los hechos, sino que simples molestias o disgustos como los que narra en



la demanda por la tardanza en ser indemnizado, que no constituyen ningún daño extrapatrimonial indemnizable, por lo que la demanda por indemnización por daño moral debe ser rechazada por el tribunal, con costas.

**TERCERO.-** Que, consta en autos que se tuvo por contestada la demanda en rebeldía de la demandada doña Beatriz Beltrán Fernández.

**CUARTO.-** Que, **replicando** la demandante ratifica la demanda en todas sus partes, haciendo presente en relación a la contestación del Fisco Chile y en cuanto a la controversia de los hechos de la demanda que de conformidad a la Ley la presente acción solo persigue declarar un monto indemnizatorio, toda vez que ya existe pronunciamiento jurisdiccional respecto a los hechos que ocasionaron el accidente, razón por la cual únicamente le toca en esta sede probar la existencia del daño que se expone en el libelo y el nexo causal entre éste y el hecho infraccional del que indubitadamente da cuenta la sentencia del Señor Juez de Policía Local. Sostiene que, en efecto, el accidente que ocasiona perjuicios a la demandante ocurrió ya que doña Beatriz Eleonor Beltrán Fernández, no respetó el derecho preferente de paso que le asistía al actor, hecho éste que ya no es posible controvertir y que fue la causa basal del accidente, por lo anterior, existe cosa juzgada respecto del establecimiento de la responsabilidad del accidente y, por lo demás, este juzgado se tornaría incompetente para conocer y establecer hechos que digan relación con infracciones a la Ley de Tránsito, por corresponderle ello de forma exclusiva y excluyente a los Juzgados de Policía Local.

Se refiere luego, a lo que dice relación con el régimen de responsabilidad aplicable, reproduciendo al efecto los incisos primero y segundo del artículo 169 de la Ley de Tránsito, al siguiente tenor: *“De las infracciones a los preceptos del tránsito será responsable el conductor del vehículo. El conductor, el propietario del vehículo y el tenedor del mismo a cualquier título, a menos que estos últimos acrediten que el vehículo fue usado contra su voluntad, son*



*solidariamente responsables de los daños o perjuicios que se ocasionen con su uso, sin perjuicio de la responsabilidad de terceros de conformidad a la legislación vigente.”* Adiciona encontrarnos ante una norma que establece de forma especial la responsabilidad del propietario de un vehículo y el tenedor del mismo, a cualquier título, en casos de accidentes de tránsito en la cual no se excluye al Fisco, sumando a ello que Carabineros es una institución disciplinada en la cual los vehículos solo pueden ser utilizados por los funcionarios previa orden que se base, a su vez, en una necesidad de ejercicio estatal; se debe considerar que el daño fue causado como consecuencia de una ejecución de función estatal, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que le cabe a la funcionaria demandada en su calidad de conductora del vehículo conforme a Ley, a quien ciertamente se debe reprochar su mala fe, en el sentido de intentar evadir en todo momento su responsabilidad y el daño que ha causado a un ciudadano esforzado, a sabiendas de que la Institución en la que ella forma o formó parte, deberá responder solidariamente. En ese sentido cita los incisos primero y final del artículo 9 de la Ley 18287, que establece procedimiento ante los Juzgados de Policía Local cual, al referirse a la acción civil que proceda por accidentes producidos por infracción a la Ley de Tránsito, indica: *“El Juez (de Policía Local)<sup>1</sup> será competente para conocer de la acción civil, siempre que se interponga, oportunamente, dentro del procedimiento contravencional..... Si no se hubiere deducido demanda civil o ésta fuere extemporánea o si habiéndose presentado no hubiere sido notificada dentro de plazo, podrá interponerse ante el juez ordinario que corresponda, después que se encuentre ejecutoriada la sentencia que condena al infractor, suspendiéndose la prescripción de la acción civil de indemnización durante el tiempo de sustanciación del proceso infraccional. Esta demanda se tramitará de acuerdo con las reglas del juicio sumario, sin que sea aplicable lo dispuesto en el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil.”*. Indica que, en efecto, y como acontece, se ha establecido un procedimiento civil especial para





aquellos casos en los cuales no se ha demandado civilmente en el procedimiento contravencional y si bien en el caso de marras se ha iniciado un procedimiento diverso, ello obedece a una superposición de normativa especial, que manda en estos casos a actuar por la vía del procedimiento de hacienda; no obstante ello, se desprende de la norma transcrita que la causa civil en la cual se persiga la responsabilidad deberá considerar por hecho cierto la ocurrencia del accidente, y la causa basal del mismo, de lo que se desprende la responsabilidad por el daño que el demandante pueda probar, lo que asegura se hará en el proceso.

**QUINTO.-** Que, **duplicando** la demandada Beatriz Eleonor Beltrán Fernández, solicita se declare que el monto solicitado debe rebajarse sustancialmente a los daños reales y efectivamente demostrados y causados, basado en que el accidente que dio origen a la acción no puede haber generado daños de la magnitud señalada en la demanda, ya que dicho monto no se condice con la realidad de lo acaecido, indicando ser necesario tener en consideración que los daños que sufrió el vehículo pueden ser reparados o haber sido reparados, cuestión de la que no se tiene certeza en la demanda, en diferentes talleres mecánicos que pueden efectuar cobros diversos quedando este hecho a la voluntad de la demandante, no siendo la elección que haga ésta la más económica, y no teniendo absoluta certeza que la reparación del vehículo hayan costado o pueda costar la cantidad de \$5.000.000, que se demanda, o que el daño moral alegado corresponda a la suma de \$8.000.000 y el lucro cesante al monto de \$11.293.000, como se señala, razonamiento que cobra una importancia basal para el proceso de autos, ya que al no tener claridad absoluta del monto de los perjuicios ocasionados surge las dudas acerca de qué tipo o si efectivamente los daños que se demandan corresponden a la realidad, o en su defecto si éstos podían ser reparados, resultando lo antes planteado del todo trascendente ya que en este acto se demanda la pérdida total del vehículo, concepto que es utilizado por las compañías de seguro cuando el daño supera el



75% del valor del automóvil y además este puede ser vendido como chatarra e incluso utilizadas varias de sus piezas como repuestos y en este entendido no se ha señalado en la demanda si el monto de los daños es de aquellos que puede ser considerado bajo el concepto de pérdida total o si la demandante vendió, y a qué valor lo hizo, el vehículo o sus piezas, por lo cual no se tiene la posibilidad de conocer datos relevantes para ejercer adecuadamente la defensa que prescribe la legislación vigente y al no tener certeza de los daños causados no se puede determinar si éstos pudieron ser reparados o si en la realidad las reparaciones fueron efectuadas, ante lo cual la demandada pudo entregar los repuestos o efectuar las reparaciones en un taller de su confianza o efectuar las cotizaciones necesarias para obtener el precio más conveniente para la realización de las mismas, lo que evidentemente debe ser considerado al momento de resolver la presente causa.

Continúa indicando que tal como se demostrará en la oportunidad procesal pertinente el costo de la reparación del vehículo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado no puede alcanzar la suma que se demanda. Asimismo, fuera del daño emergente demandado la actora demanda el daño moral que habría sufrido estimándolos en la suma no menor de \$8.000.000.-, requiriendo además todos los gastos en que deba incurrir para reparar los daños que demanda, debiendo considerarse al efecto, y en primer término, que en lo relativo al daño moral la demandante deberá demostrar sin lugar a dudas que por el accidente de autos que solo generó daños materiales se desprenda el daño moral que requiere, el que no puede ser del monto señalado. En cuanto al daño moral demandado, la contraria no señala específicamente el o los hechos que pudieron implicar sufrir un daño moral avaluado, siendo esta circunstancia absolutamente relevante para poder entender los motivos que llevan a los actores a requerir esta suma y además de lo anterior, tampoco el demandante indica cuál sería la participación o relación de la demandada conductora con las circunstancias que a juicio del actor podrían justificar la solicitud del



daño moral que efectúa, resultando poco creíble que puedan haberse originado un daño moral de la entidad que reclama, ya que no indica cuales serían los presupuestos de éste.

Sostiene que, respecto a la solicitud del pago de todos los gastos en que deba incurrir para reparar el daño, debe ser desechada ya que no ha sido evaluada y resulta incierta y sin fundamento y además de la cantidad ya señalada se solicita que ésta se pague con intereses y reajustes siendo atendible dicha solicitud, sólo desde que quede ejecutoriada la sentencia, ya que desde ese momento es que se hace cierta la pretensión.

Precisa que el monto de la indemnización solicitada por la actora, debe ser ajustada a derecho y acorde con los perjuicios efectivamente sufridos, y no basadas en meras expectativas de la actora y sobre la base de esas consideraciones, la indemnización exigida por la demandante es excesiva, agregando que, tanto nuestra doctrina como la jurisprudencia de los tribunales de justicia han establecido que de existir un daño debe haber necesariamente una equivalencia entre éste y la reparación que se solicite, expresando al efecto la Excelentísima Corte Suprema, en fallo de 16 de octubre de 1970, contenido en la Revista de Derecho y Jurisprudencia tomo 67, sección 4°, página 424, que la indemnización pecuniaria debe ser del mismo valor que el daño producido, razón por la cual se hace necesario intentar por todos los medios lograr una adecuada equivalencia entre el posible daño sufrido y la indemnización que se fije.

Finalizando indica que, la demanda de autos debe ser rechazada en los términos expuestos, determinándose que el monto solicitado debe rebajarse sustancialmente a los daños reales y efectivamente demostrados y causados, haciendo mención a que en ese sentido en un otrosí de su presentación se adjuntan tres presupuestos obtenidos de sitio web Chile Autos, por el cual se advierte que el valor del vehículo siniestrado, esto es, un Nissan, modelo V16, motor 1.6cc, año 2010, no supera los \$4.500.000, en buen estado y considerando un



taxi, siendo un valor cercano al \$1.600.000, por un mismo móvil no acondicionado para el servicio, indicando por último que la demandada doña Beatriz Beltrán Fernández, manifiesta que a la fecha en que ocurrieron los hechos relatados en la demanda, se encontraba adscrita al Contrato de Seguro Colectivo de Responsabilidad Civil de Conductores de Vehículos Policiales, cuya copia se adjunta en un otrosí de esta presentación.

**SEXTO.-** Que, al evacuar la **dúplica** la demandada Fisco de Chile, ratifica en todos sus términos lo expuesto en la contestación de demanda, añadiendo en relación con el escrito de réplica, que a contario sensu de lo que sostiene la parte demandante, se encuentran controvertidos por su parte la totalidad de los hechos alegados en la demanda, como la existencia de los daños y perjuicios alegados por la demandante en su libelo, como la responsabilidad del Fisco de Chile en la indemnización de los daños causados, por lo que asevera que el demandante deberá probar las supuestas actuaciones o hechos que habrían dado origen a la responsabilidad del demandado, así como la efectividad, naturaleza y entidad de los presuntos perjuicios que tales actuaciones o hechos le habrían causado; así como la existencia de una relación causal directa entre aquellos y éstos.

Complementa lo antes expuesto indicando que la demanda debe ser rechazada en base a los siguientes fundamentos:

1.- Improcedencia del lucro cesante demandado; refiriendo al efecto la inexistencia del daño emergente cuya indemnización se solicita, lo que queda demostrada en la contradicción existente entre los fundamentos de la demanda en este acápite, en la que se sostiene que dicha indemnización se funda en la pérdida total del vehículo a consecuencias del accidente, y la compensación que solicita en la parte petitoria del libelo por reparación del vehículo, ya que de este modo, al confesar el demandante que el vehículo fue reparado, está reconociendo que no existió tal pérdida total del vehículo. Por otra parte la demanda carece de todo fundamento, ya que en ninguna parte del libelo se avalúa la pretendida pérdida total del móvil que



alega, por lo que el libelo carece de todo contenido, razón por la cual la demanda por la que se solicita que se condene al Fisco de Chile al pago de una presunta reparación del vehículo debe ser rechazada, ya que carece de fundamento y se contradice con sus propias alegaciones en el cuerpo del escrito. Todo lo anterior sin perjuicio de que la indemnización que solicita por daño emergente debe ser rechazada ya que las sumas por las cuales solicita ser indemnizado en este concepto, constituye un enriquecimiento injusto para el actor, ya que está solicitando el pago de una suma muy superior al valor del vehículo, que es un vehículo muy antiguo, y que ha sufrido un gran desgaste por su uso, ya que es un móvil marca Nissan, modelo V16 Ex Saloon STD 1.6, fabricado en el año 2010, que se ha destinado a taxi, con alto kilometraje.

2.- Improcedencia del lucro cesante demandado; indicando al efecto que, constituyen meras expectativas del actor, que no tienen ninguna relación con la realidad que hubiera una sufrido una pérdida de ingresos por su actividad de taxi por la suma de \$11.293.000, considerando que su actividad provenía de una acción que le producía ingresos variables e inestables, que dependía de las ventas que pudiese realizar por viajes, sin perjuicio de que deben deducirse de los ingresos todos los gastos del vehículos, como por ejemplo su mantenimientos, reparaciones, gasolina, etc., por lo que nada garantizaba que pudiese haber mantenido en forma constante el mismo tipo de ingresos por su actividad, por lo que el demandante especula con los ingresos provenientes de negocios que podría haber desarrollado, sin que en ningún caso pueda considerarse que el demandante tuviera ingresos asegurados por su actividad como sostiene. La exigencia que el daño, para resultar reparable por la vía de la indemnización, sea cierto quiere significar que debe ser real o efectivo, esto es, tener existencia. La afirmación importa rechazar la indemnización del daño eventual o meramente hipotético, es decir, de aquél que no se sabe si va a ocurrir o no y en ese contexto agrega que el lucro cesante es, precisamente, siempre un daño futuro, por ello



sólo será indemnizable en tanto cumpla con la condición de ser cierto, por consiguiente, los daños por lucro cesante, fundado en hipótesis o conjeturas, por verdaderos que parezcan, sea presente o futuro, no dan derecho a indemnización, ya que el daño debe ser cierto, es decir real y efectivo. Así se desprende de los artículos 1437, 2314, 2315 y siguientes del Código Civil.

3.- Improcedencia del daño moral demandado; refiriendo que, la actora funda su demanda de indemnización del daño extrapatrimonial en que los hechos de los que fue víctima le habrían producido una angustia por la incertidumbre de obtener una respuesta satisfactoria por parte de la conductora Sra. Beatriz Eleonora Beltrán Fernández; frustración toda vez que en los autos de competencia del Juzgado de Policía Local de Ñuñoa, la demandada señaló estar en vías de avenimiento con su representante, cuestión que a todas luces señala que para él fue una quimera y una ira e impotencia, ya que continua el pasar de los meses desde que ocurrieron los hechos sin obtener respuesta positiva sin que se le hayan resarcido los daños y perjuicios ocasionados, teniendo que invertir tiempo y dinero en intentar solucionar el conflicto vía judicial, sin embargo, como se ha señalado en la contestación de la demanda, todo ello no constituye un daño moral indemnizable, ya que existe consenso en la Doctrina y jurisprudencia en el sentido que, para que exista daño moral indemnizable, no basta con que el hecho ilícito cause una molestia, dificultad o inconvenientes, sino que es necesario que esa repercusión interna se exteriorice en un menoscabo en los atributos o facultades psíquicas o morales de la persona, y lo expuesto por la demandante a este respecto, no lo es, razón por la cual debe rechazarse la indemnización por daño moral.

**SÉPTIMO.-** Que, recibida que fuere la causa a prueba la demandante ha aparejado por el primer otrosí de su libelo de folio 1 y reiterado por presentación de folio 61, prueba documental toda la cual se singulariza a continuación consistente en:



1.- Copia digitalizada de parte de denuncia N°4719, de fecha 13 de julio de 2018, efectuada ante la 33ª Comisaría de Carabineros de Chile de Ñuñoa, Prefectura Santiago Oriente, N° de evento 10034154, efectuada por Beatriz Eleonor Beltrán Fernández y don Andrés Onfray Montenegro, por cuasidelito de lesiones ocurrido en la misma fecha de efectuada la denuncia. Se describen como daños ocasionados al vehículo PPU BJZT-30: pérdida total frontal del taxi, como parachoque delantero quebrado, ambos tapabarros delanteros abollados, focos delanteros quebrados, máscara quebrada y capot abollado. Al lugar concurrió el equipo B de la Siat a cargo del teniente Renato Sánchez Rubio y personal a su cargo.

2.- Copias digitalizadas de las declaraciones judiciales de doña Beatriz Eleonor Beltrán Fernández y de don Andrés Hernán Onfray Montenegro, prestadas con fecha 07 de agosto de 2018, en causa ROL 35381-2018 del Segundo Juzgado de Policía Local de Ñuñoa.

3.- Copia digitalizada de Informe de Alcoholemia N° 24835-18, de fecha de 26 de julio de 2018, evacuado por el Departamento Laboratorio del Servicio Médico Legal, correspondiente a don Andrés Onfray Montenegro.

4.- Copia digitalizada de informe técnico N° 568-A-2018 de accidente investigado de fecha 12 de Septiembre de 2018, emitido por Carabineros de Chile Zona Tto. Carret. Y Seg. Vial Prefectura Invest. Acc. en el Tto., confeccionado por el Oficial Investigador Teniente don Renato Sánchez Rubio, que consigna entre otros la causa basal del accidente investigado, lo siguiente: *“la participante (1) ingresa con el móvil al cruce no regulado de vías, sin respetar el derecho preferente de paso al móvil (2) circunstancia a la cual se encontraba obligada por enfrentar señal vertical y horizontal “CEDA EL PASO”, obstruyendo la normal circulación a este último, colisionando el móvil (2) al móvil (1) parte posterior y por proyección el móvil (1) choca con la solera”.*

5.- Copia digitalizada de sentencia de fecha 23 de octubre de 2018, dictada en causa Rol 35381-2018-3 del Segundo Juzgado de Policía



Local de Ñuñoa, por la que se condena a doña Beatriz Eleanor Beltrán Fernández al pago de una multa de 1,5 UTM, por su responsabilidad como autora de conducción culpable y descuidada, por no respetar la señal de ceda el paso que enfrentaba, causando daños en un bien de propiedad de un tercero y lesiones leves, hecho acontecido el día 13 de julio de 2018, en tanto, se absuelve a don Andrés Hernán Onfray Montenegro de toda responsabilidad en esos autos.

**6.-** Copia digitalizada de Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el Registro de Vehículos Motorizados emitido con fecha 30 de enero de 2019, de la inscripción FVWV.73-9, correspondiente al vehículo marca Hyundai, modelo Elantra GLS FULL 1.8 AUT., año 2013, cuyo propietario es la Dirección de Logística de Carabineros, adquirido con fecha 25 de junio de 2013.

**7.** Copia digitalizada de Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el Registro de Vehículos Motorizados emitido con fecha 03 de agosto de 2018, de la inscripción BJZT.30-2, correspondiente al vehículo marca Nissan, modelo V16 EX SALOON STD 1.6, cuyo propietario es don Andrés Hernán Onfray Montenegro.

**8.-** Copias digitalizadas de cuatro fotografías del vehículo siniestrado Nissan V16 Ex Salon STD 1.6, legalizadas ante el Notario Público de San Miguel, Sr. Hernán Retamal Grimberg, más copia digitalizada de boleta de honorarios N°059329, de fecha 03 de agosto de 2018, por dicha legalización, por la suma de \$74.000 (setenta y cuatro mil pesos).

**9.-** Copia digitalizada de dato de atención de urgencia en Hospital Salvador de fecha 13 de julio de 2018, a don Andrés Hernán Onfray Montenegro.

**10.-** Copia digitalizada de solicitud de examen de electrocardiograma, por el Dr. Miguel Ángel Mardones, médico de Clínica Vespucio, de fecha 17 de julio de 2018. Se acompaña conjuntamente, copia de boleta de gastos por concepto de dicho examen.





**11.-** Copia digitalizada de examen electrocardiograma practicado en Clínica Vespucio con fecha 17 de julio de 2018, a don Andrés Hernán Onfray Montenegro.

**12.-** Copia digitalizada de receta médica otorgada a don Andrés Hernán Onfray Montenegro por la Dra. Erika Fernández, médico de Clínica Vespucio, de fecha 17 de julio de 2018. Se acompaña conjuntamente copia digitalizada de boleta de gastos por concepto de los medicamentos señalados en la receta por la suma total de \$48.520

**13.-** Copia digitalizada de examen relativo a Tomografía computada de Esternón, de fecha 17 de julio de 2018, practicada al paciente Andrés Hernán Onfray Montenegro, en Clínica Vespucio donde se señala: *“Fractura del cuerpo del esternón, comprometiendo cortical anterior y posterior, entre el segundo y tercer cartílago costovertebral”*.

**14.-** Copia digitalizada de bono de atención ambulatoria de fecha 20 de julio de 2018, por concepto de consulta médica en la especialidad de traumatología, efectuada por don Andrés Hernán Onfray Montenegro, por la suma de \$5.740.-.

**15.-** Copia digitalizada de bono de atención ambulatoria de fecha 20 de julio de 2018, practicado a las 11:30 horas por concepto de Tomografía computarizada de abdomen y Pelvis. Solicitante: Andrés Hernán Onfray Montenegro, por la suma de \$ 98.900.-

**16.-** Copia digitalizada de receta médica otorgada a don Andrés Hernán Onfray Montenegro, practicada en Clínica Vespucio, de fecha 20 de julio de 2018. Se acompaña conjuntamente copia digitalizada de boleta de gastos por concepto de los medicamentos señalados en la receta, por la suma de \$ 8.815.-

**17.-** Copia digitalizada de bono de atención ambulatoria a la orden del paciente Andrés Hernán Onfray Montenegro de fecha 31 de julio de 2018, relativo a consulta médica por especialidad en cardiología, por la suma de \$ 5.740.



- 18.-** Copia digitalizada de certificado de diagnóstico médico de fecha 03 de agosto de 2018, practicado por la Dra. Erika Fernández de Clínica Vespucio, al paciente Andrés Hernán Onfray Montenegro, el que consigna una fractura de esternón como lesión de carácter grave.
- 19.-** Copia digitalizada de Dato de Atención de Urgencia de SAPU – CLARA ESTRELLA, de fecha 14 de Septiembre de 2018, al paciente Andrés Hernán Onfray Montenegro.
- 20.-** Copia digitalizada de Dato de Atención de Urgencia practica en el Servicio de Salud H. Dr. Alejandro del Río, al paciente Andrés Hernán Onfray Montenegro, de fecha 16 de Septiembre de 2018.
- 21.-** Copia digitalizada de examen de laboratorio practicado en el Hospital de Urgencias y asistencia pública Dr. Alejandro del Río, al paciente Andrés Hernán Onfray Montenegro, de fecha 16 de Septiembre de 2018.
- 22.-** Copia digitalizada de examen de laboratorio practicado en el Hospital de Urgencias y Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río, al paciente Andrés Hernán Onfray Montenegro, de fecha 16 de Septiembre de 2018. Prueba Química Sanguínea.
- 23.-** Copia digitalizada de bono de atención ambulatoria de fecha 20 de Septiembre de 2018 a la orden del paciente Andrés Hernán Onfray Montenegro, por la suma de \$12.840.
- 24.-** Copia digitalizada de Informe de Atención de Urgencia de la demandada Sra. Beatriz Eleonor Beltrán Fernández, correspondiente a la Institución DIPRECA, de fecha 13 de julio de 2018.
- 25.-** Copias digitalizadas de sendas boletas por concepto de rentas o utilidades, correspondiente al traslado de pasajeros del vehículo-Taxi placa patente BJZT-30; emitidas entre fechas 18 de diciembre de 2018 y 01 de enero de 2019, por diversas sumas de dinero por un total ascendente a \$ 1.137.270.-



**OCTAVO.-** Que, por su parte el demandado Fisco de Chile, aparejó por el primer otrosí de su presentación de folio 8, documental consistente en:

**1.-** Certificado de fecha 21 de junio de 2019 otorgado por el Secretario Abogado del Consejo de Defensa del Estado don Keny Miranda Ocampo, sobre personería de abogada doña Carolina Vásquez Rojas, para subrogar al Abogado Procurador Fiscal de Santiago.

**NOVENO.-** Que, por su parte la demandada doña Beatriz Eleonor Beltrán Fernández, por presentaciones de folios 44 y 60, acompaña prueba documental que versa en:

**1.-** Copias digitalizadas de tres imágenes de vehículos de similares características al del demandante publicados para la venta con sus respectivos precios.

**2.-** Copia digitalizada de Contrato de Seguro Colectivo de Responsabilidad Civil de Conductores de Vehículos Policiales, de fecha 26 de diciembre de 2016, emanado de la Mutualidad de Carabineros Corporación de Seguros.

**DÉCIMO.-** Que, en virtud de la prueba documental rendida por la demandante se puede tener por establecido que el día 13 de julio de 2018, aproximadamente a las 9:50 horas, debido a la conducción imprudente de Beatriz Beltrán Fernández, quien se desplazaba en un vehículo de propiedad de la Dirección de Logística de Carabineros de Chile, ocurrió una colisión entre el automóvil conducido por ella y el vehículo manejado por Andrés Onfray Montenegro, quien experimentó daños y lesiones leves.

Lo anterior se pudo establecer particularmente por medio del contenido de la sentencia, de 23 de octubre de 2018, dictada por el Segundo Juzgado de Policía Local de Ñuñoa, en la que se establece que aconteció un accidente vehicular que fue causado por la conducción descuidada de Beatriz Beltrán Fernández, quien transitaba en el vehículo placa patente FVW-73, el que, según da cuenta el Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes, pertenece a la Dirección de Logística de Carabineros, cuestión que produjo lesiones,



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BXTXXDHDEXC

como señala la sentencia referida y los antecedentes médicos acompañados, y daños, según consigna la misma sentencia, las fotografías del vehículo y el informe técnico de Carabineros de Chile.

**DÉCIMO PRIMERO:** Que, encontrándose asentados los hechos sobre los que deberá emitirse pronunciamiento, es necesario establecer si los mismos son fundamento suficiente para atribuir responsabilidad extracontractual a las demandadas.

Al respecto, como sostenidamente se ha establecido por la doctrina y la jurisprudencia, para atribuir responsabilidad extracontractual es necesario que exista la comisión de un hecho ilícito, culpable o doloso, que cause daños a otro, sin que medie una causal de justificación.

**DÉCIMO SEGUNDO:** Que, en cuanto al hecho ilícito, baste referir que la sentencia dictada por el Segundo Juzgado de Policía Local de Ñuñoa establece inequívocamente que el accidente se produjo por la conducción descuidada de la demandada principal, cuestión que se encuentra sancionada explícitamente por la Ley N°18.290, de forma que se verifica en la especie la comisión culpable de un hecho ilícito de conductora del vehículo de propiedad de la Dirección de Logística de Carabineros.

La existencia de daños también se encuentra acreditada, atendido que el actor sufrió lesiones de carácter leve y su vehículo daños en la parte frontal, hechos que se pudieron establecer por medio de la sentencia indicada, los antecedentes médicos, las fotografías y el informe técnico de Carabineros, acompañados a la carpeta digital.

La causalidad entre el hecho ilícito y los daños cuyo resarcimiento se reclama también se puede establecer, atendido que es la colisión, producto del manejo descuidado, la que ocasionó directa e inmediatamente los daños al vehículo y las lesiones del actor.

**DÉCIMO TERCERO:** Que, habiéndose establecido la concurrencia de todos los presupuestos para atribuir responsabilidad



extracontractual a la demandada principal es necesario determinar los daños que serán indemnizados y la cuantía de la indemnización.

Sin perjuicio de la deficiencia de la prueba acompañada por la actora para establecer la cuantía exacta de los montos a indemnizar, corresponde al tribunal su evaluación en virtud de los antecedentes acompañados, según se detallará a continuación.

Respecto del daño emergente, pese a que no se cuenta con información específica de los montos desembolsados por el actor para cubrir la reparación del vehículo, si se logró demostrar que el vehículo sufrió diversos daños, cuestión que se encuentra corroborada por la sentencia y las fotografías ya referidas y, además, por el informe técnico realizado por Carabineros de Chile, el que consigna expresamente que el vehículo de su propiedad experimentó daños, cuestión que demuestra la plausibilidad de los daños experimentados por el vehículo del actor, atendido que en circunstancias normales todos los automóviles que se encuentran en una colisión experimentan simultáneamente daños, que pueden ser de distinta entidad. Sin perjuicio de lo razonado, atendido que el actor no acompañó antecedentes suficientes para fundar la cuantía de su pretensión indemnizatoria por este ítem, se accederá prudencialmente hasta la suma de \$2.500.000, considerando la magnitud de los daños que debieron ser reparados y los costos médicos asociados a las lesiones experimentadas producto del accidente.

Sobre el daño moral, según dan cuenta los exámenes médicos acompañados, el demandante sufrió lesiones, consistentes en una contusión craneana y la fractura del cuerpo del esternón, lo anterior, tal como dan cuenta las recetas de analgésicos prescritos, implicó un dolor físico para el actor, el cual, unido a la conmoción emocional o psíquica que implican este tipo de acontecimientos, permite establecer que se produjo un daño moral para el demandante, el que, en virtud de los elementos referidos, se valora prudencialmente en la suma de \$4.500.000.



Por último, en cuanto al lucro cesante, contrario a lo afirmado por la demandada solidaria, su indemnización no exige certeza respecto de su cuantía, sino que debe ser cierto en cuanto a su ocurrencia, cuestión que se verifica en la especie, pues, el vehículo siniestrado es un taxi, es decir, se encuentra destinado a la actividad laboral del actor, quien se dedica a prestación de servicios de transporte urbano. Lo anterior demuestra que el demandante efectivamente sufrió un lucro cesante producto de la accidente, el que será valorado prudencialmente en la suma de \$2.000.000, atendida la insuficiencia de los antecedentes acompañados y la variabilidad de los ingresos percibidos por una actividad laboral desempeñada de forma independiente.

De esta forma, según las distintas partidas resarcibles señaladas en este considerando, se accederá a indemnizar al actor por la suma total de \$9.000.000.

**DÉCIMO CUARTO:** Que, respecto de la solidaridad reclamada, pese a las alegaciones de la demandada, lo cierto es que la misma no emana de un juicio de responsabilidad autónomo contra la Administración en que deba establecerse la falta de servicio, sino que es un mandato expreso de la regla prevista por el artículo 169 de la Ley N°18.290, que establece que el conductor y el propietario del vehículo son solidariamente responsables de los daños o perjuicios que se ocasionen con su uso, sin que se haya alegado que el automóvil estatal involucrado en el accidente fuera ocupado contra la voluntad del propietario, razón por la que se accederá a la solidaridad solicitada.

**DÉCIMO QUINTO:** Que, atendido que las demandadas no fueron completamente vencidas, se les eximirá del pago de las costas.

Y, por estas consideraciones, visto además lo dispuesto por los artículos 160, 170, 341 y siguientes, 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; 1511 y siguientes, 2314 y siguientes del Código Civil; y, Ley N°18.290, se resuelve que:



I. Se acoge la demanda deducida con fecha 1 de marzo de 2019, sólo en cuanto se condena a ambas demandadas solidariamente al pago de la suma de \$9.000.000, según lo indicado en el considerando décimo tercero, con intereses y reajustes desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada y hasta el día del pago efectivo de la suma señalada.

II. Cada parte pagará sus costas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol: C-8.008-2019.

Dictada por Julio Ernesto Ramírez Zolezzi. Juez Suplente del Vigésimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, cinco de Enero de dos mil veintitrés.**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BXTXXDHDEXC